

Informe 0165/2009

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la comunicación de datos referidos al adjudicatario de un contrato para la prestación de un servicio en instalaciones del Ayuntamiento consultante y de los trabajadores contratados por el mismo, solicitada a la Tesorería General de la Seguridad Social que se lo ha denegado en base al artículo 11 de la LOPD y artículo 66 de la Ley General de la Seguridad Social.

I

El supuesto planteado constituye una cesión de datos entre Administraciones Públicas regulada en el artículo 21 de la LOPD en los siguientes términos:

“Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”.

Debe recordarse, al tratar de este artículo que la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre declaró contrario a la Constitución y nula la previsión que contenía el artículo 21.1 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, según la cual la cesión entre Administraciones Públicas resultaba posible cuando la comunicación hubiere sido prevista por las Disposiciones de creación del fichero o por Disposición de superior rango que regule su uso, por cuanto viene a considerar que la reserva de Ley prevista con carácter general por la Ley Orgánica 15/1999 para la cesión de datos de carácter personal ha de considerarse igualmente predicable en los supuestos de cesión de datos entre Administraciones Públicas, siendo contraria a la Constitución la posibilidad de habilitar dicha cesión con base en una norma de rango reglamentario.

De este modo, la citada Sentencia considera que, en caso de que una norma con rango de Ley no dé cobertura a una cesión entre Administraciones Públicas, la misma sólo podrá tener lugar como consecuencia del ejercicio por cedente y cesionaria de unas mismas competencias.

Lo decisivo es la prohibición expresa de que los datos se comuniquen para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas a aquellas para las que fueron recabados.

Al no ser aplicable a este caso el artículo 21.1 de la LO 15/1999, la cesión deberá cumplir lo previsto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

Fuera de estos supuestos, la cesión entre Administraciones Públicas siguiendo la Sentencia referida sólo podrá tener lugar cuando concurra una de las causas previstas con carácter general en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica, en particular cuando la cesión venga amparada en una Ley.

Dada la naturaleza de los datos solicitados referidos a la situación de alta y actividad de una empresa adjudicataria de la prestación de servicios, empresarios autónomos o no que pudieran figurar con actividad en el mismo domicilio de las instalaciones municipales y datos de afiliación de los trabajadores de dicha empresa (número de afiliación, grupo de cotización), esto es, referidos a las competencias sobre recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social reconocidas a la Tesorería General de la Seguridad Social por el artículo 63 de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, diferentes y sobre distinta materia de las ejercidas por la Corporación consultante, la conclusión es en principio, la de imposibilidad de comunicación de los datos entre ambas Administraciones, salvo consentimiento de los afectados, personas físicas. Los datos referidos a personas jurídicas quedan fuera del marco protector de la LOPD a tenor de lo dispuesto en su artículo 1.

II

El Ayuntamiento consultante señala como normas que ampararían la cesión, los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que le atribuyen competencias en materias de salubridad y control de alimentos y bebidas, por un lado, y por otro la atribución de competencias para dirigir, impulsar e inspeccionar los servicios municipales que le atribuyen los artículos 21 y 127 del Decreto de 17 de junio de 1995 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Dichas normas permitirían el acceso a locales y documentación del propio adjudicatario del servicio por parte del Ayuntamiento cuando dicho acceso se realizara en el ejercicio de actividades de fiscalización o control de la gestión y condiciones de prestación del servicio adjudicado, pero no contempla el acceso directo por dicha Corporación a los ficheros de la Tesorería General



de la Seguridad Social, ni facultades de control sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación y cotización y en materia laboral de subcontratación, que corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que no puede entenderse que tales normas permitan la comunicación de datos pretendida por el consultante.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,